

Bandera Socialista

Organo del M. Partido Revolucionario de los Trabajadores

Numero 158, año IV \$ 5.00

21 de julio de 1980

Contra las agresiones imperialistas movilización obrera

Embargo atunero, parte de toda una cadena de ataques

En el transcurso de la última semana, la armada mexicana atacó a seis barcos atuneros estadounidenses que pescaban en aguas patrimoniales mexicanas. La medida inmediata del imperialismo fue boicotear las exportaciones de atún mexicano. Este conflicto se inició después de que el gobierno estadounidense decidió elevar las tarifas a las cuales se puede pescar en aguas nacionales. Aunque finalmente Estados Unidos reconoce el acuerdo internacional de las 200 millas de mar territorial, no reconoce la validez de este acuerdo en el caso del atún, lo que absurdamente que las características migratorias del atún por "vagabundo" como dijo el Sr. Nava — no lo permiten.

Sin embargo, el acuerdo internacional no se refiere a las costumbres de los peces, sino al derecho que tienen los diferentes países a poseer una franja de mar cuyas riquezas naturales sólo ellos tienen derecho a explotar.

Paradójicamente, a pesar de las enormes necesidades de alimentación de nuestro pueblo, quienes han obtenido mayor provecho de nuestras riquezas marinas son el imperialismo norteamericano y el japonés. El imperialismo se vale de la desproporcionada capacidad que posee para explotar estas riquezas en comparación con países como México, y de la relación de subordinación a que los tiene sometidos y que le ha permitido hasta ahora realizar sus incursiones impunemente.

Precisamente, el conflicto que ahora se ha desatado en torno a la pesca del atún...

(Pasa a la página 2)

Continúa la huelga en Loreto y Peña Pobre



A las 12:30 horas del lunes 7 de julio estalló la huelga en la empresa Loreto y Peña Pobre SA. Los trabajadores demandan un aumento del treinta por ciento a sus salarios. La huelga abarca a las diferentes secciones: Loreto, Celulosa, Peña Pobre y los viveros de la empresa. En el transcurso de la primera semana se rompieron las pláticas debido a la intransigencia de la empresa, la cual ofrece sólo un incremento salarial del veintinueve por ciento.

El Secretario General de la sección Loreto, Guillermo Delgado Aguilar, declaró a nuestro periódico que "nos vamos a morir aquí, pero vamos a aguantar hasta lo último".

El mismo dirigente afirmó que todos los sindicatos de la industria papelería se han comprometido a prestar el apoyo necesario a la huelga. Además, Fidel Velázquez prometió a los trabajadores que si la empresa continuaba intransigente la Confederación de Trabajadores de México (CTM) llamaría a un paro nacional de la industria papelería.

Hace dos años que el gobierno rompió la que fuera la primera huelga en esta empresa. El sindicato en ese entonces estaba encabezado por Leopoldo Cerón, conocido dirigente de sindicatos blancos. Aquella huelga no fue aprobada por la mayoría de los trabajadores, quienes incluso desconocían la existencia del sindicato.

Actualmente, los trabajadores —más de mil 300— están afiliados a la CTM. Puede notarse en la huelga la falta de actividad y el hermetismo en la información. Existe una excesiva confianza en la fuerza de la CTM y en la palabra de Fidel Velázquez. Así, al cumplirse la

Golpe de estado en Bolivia, la COB tiene la palabra

Ver página 5

(Pasa a la página 3)

Balance de las elecciones en el SME

El resultado refleja un avance de la conciencia obrera

Por Martín López

El resultado de las elecciones para renovar a una mitad del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) reflejó un avance importante en la conciencia de los trabajadores.

La Planilla 2, que ganó por resultados arrolladores prácticamente todos los puestos a elección, excepto dos (perdió la Pro Secretaría de Obra Determinada y ganó la Pro Secretaría de Asesorales por una diferencia de sólo 134 votos), llevó a cabo una campaña electoral netamente política. El centro de su propaganda fue la crisis que vive el sindicato a causa de una dirección que se niega a movilizarlo y a permitir la participación democrática de los trabajadores para defenderlo efectivamente de las violaciones al contrato y las agresiones cotidianas de la empresa. La participación en esta planilla del Bloque de Lucha Sindical, con dos candidatos que fueron los principales oradores en los mítines, sin duda contribuyó de manera importante para el triunfo. Pero también el hecho de que el sector mayoritario de esta planilla, constituido por una burocracia sindical secundaria, fuera accesible y consecuente —al menos en la propaganda— refleja algo más que mero oportunismo.

Desde nada más un año, al final de la campaña electoral que tuvo lugar entonces, era difícil descubrir diferencias importantes entre los planteamientos políticos de las seis planillas participantes. En aquella ocasión los problemas centrales del sindicato y la industria —la defensa del contrato, de las zonas y la materia de trabajo; la lucha por la planta a los provisionales, por la democratización del SME, por la reforma de estatutos, por una integración industrial que no afectara a los trabajadores, y por una unidad democrática y combativa— eran manejados por una vanguardia representada en la Planilla 4. Pero estos planteamientos, aunque correspondían a la realidad y a la preocupación de la base electricista, no habían formado cuerpo en ella; esto facilitó que cualquier planilla los pudiera agitar demagógicamente. El mismo Secretario General, Manuel Fernández, los manejó en su campaña. Pero de un año a la fecha las agresiones por parte de la empresa han arreciado, y también ha aumentado la movilización de los trabajadores a través de mítines, manifestaciones, asambleas e inclusive un paro de veinticuatro horas: la corriente democrática se ha fortalecido en los departamentos y en su presencia política a nivel de todo el sindicato. La fuerza de los hechos se impuso a la política demagógica de la planilla triunfadora pasado. Si bien Fernández, en un lenguaje de izquierda (el artículo Popular Socialista) en su

campaña de hace un año, en lo concreto su actuación se vio limitada por su relación con la burocracia del SME y con el estado. Así, maniobró para que no se emplazara a huelga por violaciones al contrato, impuso el tope salarial y prácticamente eliminó el funcionamiento de asambleas.

Todo esto fue dando más claridad a los trabajadores sobre los problemas más importantes y la actitud frente a ellos de la dirección del sindicato. Por eso en la campaña de este año no se pudo hacer la misma demagogia que el año pasado. La Planilla 1, cuya cabeza, Fuentes Briseño, conoce perfectamente los problemas técnicos y políticos de la integración de la industria eléctrica, no los tocó para nada, pues sus lazos con la empresa se lo impedían. La Planilla 2, apoyada por Manuel Fernández, los mencionó, pero no pudo profundizar en ellos por su compromiso con toda la política de la dirección actual.

La Planilla 3, que no estaba comprometida con esta política, fue por lo tanto la única capaz de plantear las posiciones más avanzadas, que han venido siendo sostenidas por el Bloque de Lucha Sindical.

Ahora, el carácter de los problemas y el grado actual de movilización de los trabajadores en torno a ellos exigen que la Planilla 3 sea consecuente con sus planteamientos. Así como la situación que guarda la base del SME obligó a la Planilla 3 a precisar su política, ahora la planilla triunfadora se verá en la necesidad de instrumentar medidas para aplicarla; la derrota de la planilla impulsada por Fernández indica sin lugar a dudas que los márgenes de maniobra utilizados por éste se han reducido. Esto deja ver la posibilidad de que la alianza establecida entre el Bloque de Lucha Sindical y un sector de la burocracia vaya más allá de la coyuntura electoral. Aunque serán

los acontecimientos los que precipitarán la toma de posiciones, la situación actual indica que la base para las corrientes democráticas será adoptar una posición sectorial, retirarse de la alianza hacia posiciones defensivas; esto significaría dejar el campo libre a las maniobras en las cumbres del sindicato. Todo lo contrario, de lo que se trata ahora es de aprovechar este triunfo electoral para consolidar al Bloque de Lucha Sindical independiente, por medio de la aplicación de un plan de movilizaciones y de intervención para enfrentar los problemas del sindicato y presionar a los miembros del Comité Central que se comprometen con el programa de la Planilla 3. El fortalecimiento en los departamentos por medio de ganar más representaciones, la movilización de la base, y una mayor precisión de su política a partir de enfrentar los problemas concretos que le dé al SME un carácter más ofensivo en el proceso de unificación con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) son las tareas que enfrenta ahora la corriente democrática.

Contra las agresiones imperialistas

(Viene de la portada)

problema mucho más general. El imperialismo se dedica permanentemente a expoliar los recursos naturales de los países que domina, como México. Además, es cada vez más conocida la ingerencia que tiene el imperialismo, principalmente el norteamericano, en las principales industrias nacionales gracias a la dependencia económica y tecnológica del país; es el caso de las industrias eléctrica, petrolera y alimenticia, por ejemplo.

Aún más, la actitud arrogante de Estados Unidos en el caso del atún forma parte de una política global que está hoy renovando el imperialismo norteamericano en todo el mundo.

Diferentes funcionarios norteamericanos han declarado repetidamente que, dado el fermento revolucionario que se extiende en Centroamérica y el Caribe, Estados Unidos debe adoptar una política especial hacia México —más suave, de "ayuda"— para evitar que le llegue la contaminación revolucionaria. Sin embargo, como está siendo claro, al imperialismo le es imposible separarse de su propia lógica expoliadora. Por el contrario, el imperialismo multiplica cada vez más los roces y enfrentamientos hasta con sus gobiernos "amigos", con el afán de mantener su dominación económica y política, reafirmar su autoridad y hacer recaer sobre sus sometidos el peso de la crisis económica por la que atraviesa.

Efectivamente, Estados Unidos está haciendo todos los intentos posibles por volver a la política del gran garrote. Conflictos como el del atún deben verse en el marco de las agresiones que está montando el imperialismo en todo el mundo: contra Irán, contra Afganistán, contra Cuba, contra El Salvador, contra Puerto Rico.

Desde luego, éstas son agresiones montadas contra procesos revolucionarios en marcha, contra las luchas de liberación que cada vez proliferan más en todo el mundo. Pero el imperialismo no se detiene ahí. Necesita fortalecer su dominio en todas partes. Por eso hasta ante la más tímida medida nacionalista responde violentamente. Es indudable que detrás de la agresiva actitud norteamericana está también la cuestión electoral. Carter quiere demostrar que puede aplicar mano dura para restar votos a su contrincante Ronald Reagan. Lo que resulta claro es que cualquiera que sea el ganador proseguirá con la política de endurecimiento del imperialismo.

La ofensiva del imperialismo norteamericano para aumentar el sometimiento en el que mantiene a nuestro país se ha expresado últimamente, para sólo mencionar algunos ejemplos, en los embargos de uranio y de camarón, en el trato a los trabajadores migratorios mexicanos y en el intento de imponer la entrada de México al GATT.

El gobierno mexicano ha sido incapaz de responder a esta ofensiva general. La detención de los barcos piratas norteamericanos es sin duda una medida correcta, pero es sólo un lunar en la política general del gobierno mexicano. Hace mucho tiempo que en México era del conocimiento público la incursión de estos barcos piratas en nuestro mar patrimonial. Pero no sólo no se les había hecho nada, sino que incluso se les había encubierto. Hasta ahora se atreve el gobierno a tomar esta medida.

¿Y por qué ahora si el gobierno mexicano ya no se "hace de la vista gorda"? Simplemente, porque no le quedaba otra. La subordinación al imperialismo no es absoluta. El intento de las burguesías nativas y sus gobiernos por negociar las condiciones de su subordinación —por mejorar su participación en esta relación, en las ganancias que se extraen de la sobreexplotación de los trabajadores y de la explotación de los recursos naturales— produce roces con el imperialismo. Ante la ofensiva imperialista en todos los planos, el gobierno mexicano está

respondiendo con una medida que le permite reafirmar su papel en las negociaciones. Al mismo tiempo, esta medida le permite remozar su imagen nacionalista en el propio país.

A pesar de que ha continuado deteniendo barcos piratas norteamericanos, es dudoso que el gobierno mexicano dé todos los pasos necesarios para acabar efectivamente con la piratería. De hecho, el país carece de los medios para explotar racionalmente sus propios recursos marinos y para protegerlos. Aún más, la política general del gobierno mexicano no corresponde a la actitud asumida en la cuestión del atún. Lejos de defender consecuentemente todos nuestros recursos naturales, el gobierno mexicano le ha abierto las puertas del país al imperialismo. Puede enfrentarse al imperialismo en un problema particular como el del atún, pero no está dispuesto a enfrentarse a la ofensiva general del imperialismo, que es realmente lo importante.

Son los trabajadores mexicanos quienes pueden salir realmente en defensa de nuestros recursos naturales y parar con su movilización la creciente rapia del imperialismo yanqui. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el mexicano han declarado que el problema se restringe al atún y que México no utilizará instrumentos de presión como el petróleo para solucionar a su favor el conflicto. Sin embargo, como hemos visto, no se trata solamente del problema alrededor de la pesca del atún, sino de toda una ofensiva del imperialismo contra nuestro país.

Los trabajadores mexicanos deben recurrir a la movilización para oponerse a las agresiones imperialistas. En esta lucha no debe descartarse la utilización de un boicot petrolero.

El Congreso del Trabajo sería el organismo adecuado para organizar las movilizaciones de los trabajadores para responder a la prepotencia yanqui y defender nuestros recursos naturales. Sólo los trabajadores pueden hacerlo independientemente y consecuentemente. Las organizaciones y sindicatos de vanguardia podrían tomar la iniciativa.

directorio

Bandera Socialista

Órgano del movimiento por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (Sección Mexicana de la Cuarta Internacional). Asociación Política Nacional. Por acuerdo de la Comisión Federal Electoral, el mPRT obtuvo su registro como Asociación Política Nacional el 28 de noviembre de 1978 (el acuerdo apareció publicado en el Diario Oficial el día 29 de ese mismo mes). Dado el carácter antidemocrático de la Ley sobre Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que no le permite a un partido "ostentarse" como tal si es reconocido por la ley sólo como asociación política, el PRT tuvo que incluir las palabras "movimiento por el" (señaladas con una "m") antes de su nombre. Director: Sergio Rodríguez.

Redacción: Arturo Argüello, Fabián Díaz, Graciela Pacheco, Héctor de la Cueva, José Luis P.H. Ayala, Margarito Montes, Martín López, Rosa Amelia González, Tomás Galindo, Valentin González. Equipo Técnico: Aaron Estévez, Juan Álvarez, Martha Rodríguez, Rosa Amelia González. Fotografía: Eduardo López y Ma. Esther Álvarez. Administración: Guillermo Álvarez, Juan Álvarez, Ma. del Carmen Álvarez. Domicilio de la Redacción y de la Administración: Baja California 71, Colonia Roma, México 7, D.F. Impreso en Litho Balmuciano, teléfono 763 1375. Los artículos firmados no expresan necesariamente el punto de vista de esta publicación. Bandera Socialista aparecerá todos los lunes de 1980 excepto el 31 de marzo, el 22 y el 29 de diciembre. Toda correspondencia

debe ser enviada a nombre del director al Apartado Postal 11-423, México 11, D.F.

Subscripciones en la República Mexicana. Por correo ordinario de tercera clase (sólo abió): seis meses \$120.00 MN; por correo ordinario de primera clase: seis meses \$180.00; por correo aéreo: seis meses \$150.00. Subscripciones al exterior de la República Mexicana. Por seis meses, correo aéreo de tercera clase: Norteamérica, posesiones de EUA, Centroamérica y Las Antillas: \$10.00 US Dls.; Sudamérica: \$8.50 US; Europa: \$15.00 US.

Las subscripciones por un año cuestan el doble de las de seis meses. Cierre de esta edición: 15 de julio.

Perspectiva Mundial

SUSCRIPCIONES

- ☐ US\$2.50 suscripción introductoria (5 números)
- ☐ US\$8 por seis meses (cualquier parte del mundo)
- ☐ US\$16 por un año (cualquier parte del mundo)
- ☐ US\$25 por un año (correo aéreo a América Latina)
- ☐ US\$30 por un año (correo aéreo al resto del mundo)

UNA REVISTA SOCIALISTA DESTINADA A DEFENDER

LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

Nombre
Dirección
Ocupación/Sindicato/Escuela
Envíe cheque o giro postal a nombre de Perspectiva Mundial, 408 West Street, Nueva York, N.Y. 10014 E.U.A.

ector eléctrico: ¿reorientación o paliativos?

ervantes del Río,
"chivo expiatorio"

Artín López

El pasado 12 de julio fue destituido por orden presidencial el Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Hugo Cervantes del Río. Su puesto lo ocupa ahora el ingeniero Alberto Escofet Artigas, conocido por sus dotes técnicas y por sus habilidades políticas. Él hizo ver su intervención cuando se presentó como nuevo Director de la CFE ante la prensa. Escofet planteó un plan de emergencia a corto y mediano plazos para acelerar la compra de equipo y la construcción de obras, supuestamente con el fin de mejorar el funcionamiento de las instalaciones de la empresa y aumentar la capacidad de generación eléctrica para abastecer las necesidades del consumo.

Dirigiendo lo afirmado por Bandera Socialista y otros órganos de izquierda, informó que existen problemas de fondo en la industria eléctrica, independientemente de las obras en las plantas de Salamanca y Amamiyá, y —hasta ahora lo dicen— Valle de México: concretamente, afirmó que la reserva eléctrica estaba revaluada en un 3.5 por ciento, también que el déficit de 13.5 millones de kilovatios hora (kwh) pronto se superará en la primera quincena de agosto.

Como objetivos de corto plazo se dijo de "reponer las unidades eléctricas que tuvieron fallas de operación en las calderas —en los casos de Altamira y Salamanca—, y por exceso de uso —en el caso de la planta de México—, de poner en la próxima semana (Cervantes del Río había informado que esta planta dejaría a funcionar el 15 de julio); de la puesta en operación de calderas de gas para poder regularizar el servicio en agosto.

Se señaló que estas últimas medidas como turboturbinas, son una especie de plantas portátiles de muy alto costo por el gas que consumen y que generalmente se utilizan para casos de emergencia como el actual.

El plan de mediano plazo se reduce a iniciar negociaciones con algunas empresas —nuevamente el corporativismo— para acelerar la construcción de obras que garanticen la ampliación de la capacidad de generación de energía eléctrica.

A fin de cuentas, tanto la destitución del chivo expiatorio del Río como el plan anunciado no son más que otros tantos paliativos. No se propone en realidad algún plan concreto de largo plazo para una industria clave para el desarrollo industrial, la cual se debate en sus propias contradicciones: ser una empresa subsidiaria de la acumulación y reproducción capitalista, y, por lo mismo, con un crecimiento dependiente de las necesidades de la industrialización controlada por intereses privados imperialistas y nacionales, pero que a la vez exige una organización y planificación que atente contra esos mismos intereses.

Las propias cifras que dan ahora dependencias estatales ilustran la dramática situación de la industria. Según la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la CFE es la empresa estatal que recibió más subsidio del gobierno el año pasado: 35 mil 200 millones de pesos. Tuvo un déficit de 46 mil 748 millones de pesos, y para subsanarlo se recurrió al subsidio y a un financiamiento de 49 mil treinta y ocho millones. La CFE y Petróleos Mexicanos (PEMEX) representan los renglones más importantes de la deuda pública interna y externa.

Toda la inversión destinada a llevar el incremento de la capacidad instalada solamente consiguió



Hugo Cervantes del Río: le tocó pagar los platos rotos.

o sea, en un dos por ciento, cuando el objetivo del Plan Global de Desarrollo era de aumentarla en un diez por ciento para un incremento en la demanda del 7.6 por ciento. Esto explica claramente el por qué del racionamiento eléctrico. La dependencia tecnológica, la política pragmática del estado con relación a esta industria, el corporativismo, la corrupción y el carácter subsidiario de la CFE han conducido a esta situación. Las "soluciones" que da el gobierno son, así, meros paliativos para tratar de subsanar un problema más complejo. Por ejemplo, la CFE tiene un derroche de energía impresionante.

Normalmente, en la transformación de energía primaria (caídas de agua, calor, etc.) a energía secundaria (en este caso electricidad) se pierde un porcentaje, que en México es más del doble del que se pierde en los países desarrollados; la utilización de tecnología extranjera de muy diversas procedencias, sin una estructura adecuada y homogénea, y la ausencia de planes reales y técnicos capacitados provocan esta pérdida. Además, según las cifras de la CFE, ésta utiliza para su consumo interno más de la cuarta parte de la energía producida, lo cual es absurdo, pues ninguna otra empresa, por importante que sea, utiliza una cuarta parte del consumo nacional de energía eléctrica.

Además, el déficit en la CFE se explica principalmente —aparte de la corrupción y el corporativismo de funcionarios y líderes "charrros"— por la política tarifaria de subsidios, que implica que los industriales, que consumen casi el noventa por ciento de la energía eléctrica producida, la paguen a muy bajo precio, mientras el consumidor doméstico la paga más cara. Aunque se aumentan las tarifas eléctricas se mantiene ese criterio, y como además los costos

aumentan a un ritmo muy superior al de las tarifas —particularmente las que pagan los industriales—, resulta que hay una transferencia de valor de la CFE hacia la burguesía industrial que actualmente debe ser de alrededor de 50 mil millones de pesos.

Aunque la CFE es una empresa subsidiaria, no por ello deja de ser

necesario para el capital global imponerle una planificación por lo menos relativa, pues crisis como la actual lesionan sus intereses. Si bien la patronal puede recuperarse posteriormente por medio de aumentar la sobreexplotación de los trabajadores, los apagones no dejan de afectar el buen funcionamiento del sistema. Es por ello que el estado tendrá que abordar más seriamente este problema, aunque por ahora siga poniendo parches a un globo que ya estalló.

Algunos sectores nacionalistas y los reformistas irredentos ya hablan de una mayor coordinación jurídica, administrativa, financiera y técnica de la industria eléctrica. Sin embargo, en el sistema capitalista ésta no puede dejar de ser una industria de infraestructura, subsidiaria; un instrumento de la acumulación, centralización y reproducción del capital. Una industria eléctrica "al servicio del pueblo" no puede existir en este sistema. Es por ello que todo planteamiento de reestructuración —por muy bien intencionado que sea—, si no entra dentro de una perspectiva de lucha anticapitalista más amplia, y no se liga y permite la participación de la clase obrera, borrarán en el vacío. Por eso nuestra insistencia de que los trabajadores intervengan, no para secundar los planes del estado, sino para plantear su propia alternativa de clase. No hay que olvidar que la política económica seguida en la CFE estuvo íntimamente ligada a la agresión contra la Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), la más consecuente luchadora por una

comisión paritaria en la administración de la empresa. Pero tampoco debemos olvidar que la Comisión Legislativa de Unidad que funcionó democráticamente en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) plantea, entre los puntos programáticos que ha querido olvidar la dirección sindical, el control obrero sobre la industria eléctrica —diferenciándolo muy bien de la coparticipación y de la administración obrera, que significarían participar en los planes del enemigo—, que representaría ejercer el derecho de veto y el planteamiento de clase sobre la industria en una perspectiva de lucha proletaria. Es en esa dirección que deben apuntar los trabajadores electricistas.

... Loreto y Peña Pobre

(Viene de la portada)

primera semana de huelga, no se había solicitado la solidaridad de otros sindicatos u organizaciones políticas; ni siquiera se ha hecho lo suficiente para informar a la opinión pública del desarrollo del conflicto.

Indudablemente que la CTM es la central más poderosa del país. Pero esta fuerza puede jugar a favor de los trabajadores sólo a condición de que los dirigentes de dicha central lleven realmente a la práctica el apoyo prometido, y desgraciadamente existen múltiples ejemplos de conflictos en los que no ha sucedido así.

La falta de experiencia en este tipo de luchas y en la vida sindical, y la experiencia frustrante con la dirección anterior llevan hoy a los trabajadores a dar su confianza a la CTM. Pero siempre ha sido un error confiar a ciegas. Los trabajadores deben exigir que esa central ejerza una solidaridad efectiva para que el conflicto se solucione lo más pronto posible.

Pero nada puede sustituir a lo que los propios trabajadores pueden hacer por sí mismos. Aún más, el

resultado de su lucha es del interés de todos los trabajadores. Por esta razón es importante terminar con la política de desmovilización y enclaustramiento que se ha seguido en la huelga. Aún es tiempo de salir a las calles a informar, a pedir solidaridad, a presionar a la empresa y a las autoridades del trabajo.

La negociación entre dirigentes sindicales y empresa debe ser apoyada por la movilización constante de los huelguistas. Es incorrecto esperar a que el conflicto se haga más difícil para entonces "ver si pedimos ayuda a otros sindicatos". Esta es una tarea que debe realizarse desde hoy y que debió hacerse incluso antes del estallamiento del conflicto. Es obvio que los trabajadores deben evitar el desgaste que provocaría la prolongación de la huelga, y su movilización y el apoyo de otros sindicatos pueden ser decisivos para que triunfe más rápidamente su lucha.

El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) se solidariza con los huelguistas y está dispuesto a luchar incondicionalmente al lado de los trabajadores.

Nicaragua: la bancarrota de los sectarios

¿Mantiene el POS que es contrarrevolucionario el gobierno de Nicaragua?

Por Felipe García Casillas

La revolución nicaragüense, como en general todo proceso revolucionario, ha afectado a las organizaciones que se reclaman del socialismo. En este caso no sólo a aquellas organizaciones que se encuentran en el lugar mismo de los hechos, sino a nivel internacional a todas aquellas que han tomado posición con respecto a dicha revolución.

El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) no ha sido una excepción en ese sentido. Para decirlo en pocas palabras, nuestra postura de solidaridad total con la revolución nicaragüense sostenida intransigentemente fue el motivo fundamental en el plano político que condujo a la escisión de una parte minoritaria de nuestras filas.

A fines del año pasado, tanto del PRT como en general de la Cuarta Internacional se escindió una corriente denominada Fracción Bolchevique (FB), la cual, sin comprender las potencialidades de la revolución nicaragüense y su dirección —el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)—, adoptó una postura sectaria.

El desarrollo del proceso revolucionario en Nicaragua durante todo este año ha mostrado que valió la pena haber asumido esta posición

de apoyo total a la revolución y, además, que las apreciaciones sectarias de la FB —hoy constituida en México como Partido Obrero Socialista (POS)— eran profundamente incorrectas.

Las diferencias surgidas en nuestras filas el año pasado en este terreno prácticamente se centraban sobre la evaluación de la revolución, sus potencialidades y —especialmente— las posibilidades que tenía en función del hecho de que su dirección indiscutida era el FSLN. Para la FB —hoy POS—, el que la dirección sandinista no fuera una dirección marxista revolucionaria —es decir, trotskista— la invalidaba para poder dirigir el proceso en un sentido revolucionario. Todas sus pesimistas expectativas sobre lo que llamaban la "contrarrevolución democrática" que supuestamente se desarrollaría en Nicaragua hacían recaer, aunque no lo dijeran explícitamente, toda la responsabilidad de que se adoptara este curso sobre la dirección sandinista. Sin embargo, ha sucedido todo lo contrario de lo que sus fatalistas profecías indicaban. La experiencia de este año ha demostrado —incluso con avances en la consolidación de un gobierno obrero y campesino— que la Cuarta Internacional tenía la razón al sostener que la lógica revolucionaria

seguiría su curso y que la postura de los revolucionarios no podía ser otra que la del apoyo irrestricto a este proceso y a quien lo conduce.

Aunque el PRT reconocía que la dirección sandinista había hecho planteamientos poco claros al nivel programático antes de la insurrección del año pasado, también afirmaba que esto no bastaba para juzgar definitivamente a esta corriente. En última instancia, es determinante la forma en que, en la práctica, actúa una corriente política. Y en la práctica los sandinistas han dirigido revolucionariamente el proceso. Qué tan consciente o no ha sido la adecuación programática a la práctica revolucionaria por parte del FSLN puede ser otra cosa para juzgar o caracterizar a la corriente. Pero lo que no puede quedar en duda es que desde ningún punto de vista se trata de una corriente contrarrevolucionaria. La prueba de los hechos ha demostrado claramente lo anterior. Sólo los sectarios recalcitrantes pueden atreverse a negarlo.

Obviamente, no coincidimos totalmente con el FSLN al nivel programático. Especialmente, hemos visto que los compañeros sandinistas no parecen haber comprendido cabalmente la concepción leninista de la democracia socialista. En su oportunidad, hemos criticado fraternalmente a los compañeros cuando hemos creído que sus acciones en este campo no eran correctas. Pero esa es una cosa y otra es que en nuestra política hacia Nicaragua hemos puesto el énfasis en la mayor solidaridad y no en la crítica, como lo hacen los sectarios. Además, en el terreno de la democracia hemos visto cómo ésta se ha ampliado para los obreros y campesinos a través del Consejo de

Estado y los cabildos, e incluso el FSLN ha cambiado de actitud hacia sus críticos ultrazquierdistas.

En su curso sectario, los compañeros del POS han tenido que coincidir con los máximos exponentes de esta desviación: la corriente internacional que en México está representada por la Liga Obrera Marxista (LOM). La LOM muestra como en un espejo aquello en lo que puede llegar a caer el POS si no hace a un lado sus esquemas sectarios y sus odios fraccionales: veinte años después del triunfo de la revolución cubana, la LOM todavía puede aceptar que ha habido una revolución socialista; para ellos, no hay diferencia cualitativa entre Castro y Batista. Ese es el curso que parece estar siguiendo el POS.

Al mismo tiempo, este año de revolución ha demostrado también que, si bien el PRT no podía transigir en cuanto al apoyo a la revolución nicaragüense, las diferencias con la FB no eran de tal magnitud que no pudieran resolverse en el marco organizativo del partido. Como dijimos entonces, era sólo cuestión de tiempo comprobar quién tenía la razón sobre Nicaragua. Era cuestión de esperar para ver si cuajaba la "contrarrevolución democrática" o accedía al poder un gobierno obrero y campesino. En vez de disciplinarse a la mayoría y dar oportunidad a que la misma práctica demostrara qué posición era la correcta, la FB optó por la aventura de escindirse. Ahora, si bien no afirman que se ha dado la "contrarrevolución democrática" —lo que sería un escándalo mayúsculo—, como toda secta incapaz de reconocer sus errores los compañeros del POS prefieren profundizarlos y mantenerse en la misma orientación. Sin embargo, la realidad está ahí para quien quiera verla.

Las mujeres y la conscripción en EU

Carter pretende dividir el movimiento antiguerra

(El siguiente artículo lo tomamos del número 9 de este año de la revista socialista norteamericana *Perspectiva Mundial*.)

El presidente Carter está haciendo todo lo posible por reinstaurar el servicio militar obligatorio en Estados Unidos. Además, quiere hacerlo extensivo a las mujeres. Según Carter, quiere incluir a las mujeres porque se trata de igualdad de derechos.

Nada más falso. La conscripción de mujeres y hombres de ninguna manera representaría un avance para los derechos de la mujer. Sería una derrota para todo el pueblo trabajador.

Las batallas por la igualdad

El carácter reaccionario de la propuesta de Carter lo reconocen los miles de jóvenes que han salido a las calles para protestar contra el servicio militar obligatorio para quien sea. En estas manifestaciones han participado muchas mujeres. Ellas no han sido engañadas por el mal uso que hace Carter de la lucha por la igualdad.

Las batallas de las mujeres por la igualdad son luchas contra la discriminación, por poner fin al *status* de segunda categoría que les ha sido impuesto desde hace tanto tiempo a las mujeres simplemente

por ser mujeres. Son batallas por la igualdad de derechos en la educación, en los empleos y en todas las esferas de la sociedad.

No es un derecho el tener que combatir y morir por los intereses de los monopolios petroleros. Por eso, miles de personas levantan su voz en mítines y manifestaciones, diciendo "¡Igualdad de derechos, sí! ¡Conscripción, no!"

Abolir la discriminación contra la mujer beneficiaría al pueblo trabajador, tanto hombres como mujeres. La igualdad no quiere decir que las mujeres deben someterse a nuevos ataques contra los derechos del pueblo trabajador —y de eso se trata el servicio militar obligatorio.

Los soldados que fueron a Vietnam fueron obligados a servir como carne de cañón en la guerra que Washington libró contra los obreros y campesinos vietnamitas. Esa guerra trastornó las vidas de toda una generación de jóvenes trabajadores, y además murieron 57 mil de ellos.

¿Ejército igualitario?

A fin de que una nueva conscripción sea más aceptable, Carter ahora está tratando de pintar al ejército como una institución que garantiza la igualdad de oportunidades en el empleo, y hasta como una fuerza para la liberación de la mujer en esta sociedad.

Pero demasiados soldados negros y latinos aprendieron a través de sus dolorosas experiencias que el ser enviados a Vietnam en el ejército no le restó racismo al aparato militar ni a la sociedad capitalista norteamericana.

La capacidad de combate de las mujeres no es lo que está en cuestión en el debate en torno a la conscripción. La historia ha demostrado que las mujeres son tan capaces como los hombres para combatir y para arriesgar sus vidas

por una causa justa. En Estados Unidos esto se ha demostrado por el papel ejemplar de las mujeres en el movimiento de liberación de los negros y en el movimiento obrero, para no mencionar su papel en la lucha por la igualdad de derechos para las mujeres.

Las luchas de liberación en Cuba, Vietnam, Nicaragua e Irán nos dan poderosos ejemplos de mujeres empujando el fusil para luchar por la libertad.

Para qué quieren la conscripción

Pero, ¿qué es por lo que Carter quiere que luchan y mueran los hombres y mujeres del pueblo trabajador?

Carter quiere poder enviar tropas yanquis a lugares como Afganistán, donde Washington apoya a las fuerzas ultraderechistas. Nada desmascara mejor la hipócrita preocupación de Carter por los derechos de las mujeres que el apoyo que brinda a estos acaudalados reaccionarios. Esas guerrillas respaldadas por la CIA están tratando de derrocar al gobierno de Kabul porque éste dio las tierras de algunos grandes latifundistas a los campesinos pobres, y porque comenzó a enseñarles a leer y a escribir a las mujeres y puso fin a la venta de niñas para que sirvieran de esposas.

Carter quiere poder utilizar a jóvenes hombres y mujeres del pueblo trabajador para apuntalar a dictadores como el ex cha y Somoza. No pudo salvar a estos archicriminales, pero espera tener mejor suerte en salvar a la criminal junta militar de El Salvador. El gobierno ya ha enviado marines a ese país centroamericano para evitar "otra Nicaragua". Así comenzó la guerra contra Vietnam.

Las mujeres no tienen absolutamente nada que ganar con ser conscriptas al servicio de los planes intervencionistas de Washington contra los pueblos que luchan por su

liberación.

El gobierno norteamericano apoya a los chas, los Somozas y a los reaccionarios afganos del mundo porque estos títeres protegen las ganancias de las compañías petroleras, de los banqueros y de todas las grandes corporaciones norteamericanas.

Pero el profundo sentimiento antibélico que arraigó en la conciencia del pueblo norteamericano durante la guerra de Vietnam y que forzó a que se eliminara la conscripción en 1973 es un tremendo obstáculo para los planes de Washington de usar tropas yanquis para seguir siendo la policía del mundo.

La ofensiva actual de Carter para reimponer el servicio militar obligatorio tiene como fin revertir ese sentimiento antibélico y así tener las manos libres para intervenir nuevamente como en Vietnam.

¿Por qué propuso Carter que las mujeres también sean inscritas para el servicio militar?

Además de presentar la conscripción como un paso hacia la igualdad de la mujer, Carter está tratando de desviar el debate sobre la conscripción y convertirlo en un debate sobre la conscripción de las mujeres.

Esto ya ha logrado sembrar cierta confusión entre los que se oponen al servicio militar obligatorio. Por ejemplo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dice que se opone a la conscripción porque constituye una violación de los derechos democráticos, pero al mismo tiempo amenaza con entablar un pleito al gobierno si no se incluye a las mujeres, con lo que cae en la trampa de demandar... ¡que se violen "igualmente" los derechos de todos! Esta postura reaccionaria da al traste con la oposición de la ACLU a la conscripción.

Nuevo golpe de estado en Bolivia

La COB tiene la palabra

por Héctor de la Cueva

El 17 de julio, el "camino hacia la normalización democrática" de Bolivia se vio nuevamente truncado por un golpe de estado, el 155 en la historia de ese país. Los militares tiraron a la basura las elecciones recién celebradas a fines de junio e impusieron la ley del terror, declarando a todo el país como "zona militar". Se ha instalado en el poder una junta militar compuesta por los comandantes de las tres armas: general Luis García Meza, del ejército; general Waldo Bernal, de la fuerza aérea; y contralmirante Oscar Terrazas, de la marina.

Un blanco inmediato de los militares fue la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), donde pretendían reunirse el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) precisamente para organizar la resistencia. En las primeras informaciones se hablaba de que en el asalto habían sido heridos Juan Lechín —máximo dirigente de la COB— y Marcelo Quiroga Santa Cruz —quien fue el candidato presidencial del Partido Socialista Uno y que quedó en cuarto lugar en las pasadas elecciones—, y que ambos habían sido secuestrados. La esposa de Quiroga Santa Cruz ha declarado que este murió posteriormente debido a sus heridas. La propia presidente derrocada Lidia Gueiler fue detenida sin se desconoce su paradero.

Como es evidente, la burguesía y el imperialismo están lejos de poder resolver la crisis social, económica y política que sacude a Bolivia. El propio gobierno de Gueiler surgió a raíz del fracaso del golpe de estado encabezado por el general Natusch Busch en contra del gobierno interino de Walter Guevara Arce. La maniobra de Natusch, a su vez, se produjo después de que en los comicios celebrados el año pasado ninguna fuerza alcanzó los votos necesarios para ocupar el poder ejecutivo y el congreso tampoco logró nombrar un presidente definitivo.

La sombra de un nuevo golpe de estado estuvo presente durante todo este año, amenazando con interrumpir el proceso electoral que estaba llevándose a cabo. De hecho, la posibilidad cercana de un golpe de estado hacía parecer por momentos absurdas la intensidad de las campañas electorales y la cantidad de fuerzas involucradas en éstas —decenas de partidos y agrupaciones—, pues amenazaba con disiparlas en cualquier momento.

Un hecho destacado en este proceso electoral fue la postulación de Juan Lechín para la presidencia en parte de la Alianza-PRIN —compuesta por el Partido revolucionario de la Izquierda nacional, el Partido Obrero revolucionario (Combate, simpatizante de la Cuarta Internacional), el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari, la Vanguardia Comunista, la Organización Socialista de los Trabajadores y otros agrupamientos—, candidatura que contaba con apoyo de sectores importantes, entre todo de la base de la COB. La candidatura de Lechín prometía secretar las aspiraciones políticas de la clase obrera boliviana en el terreno electoral y representar una alternativa política clasista. Sin embargo, ya entrado el proceso, Lechín desistió de su candidatura, fraudando a los trabajadores y poniendo una opción política fundamental sobre todo en los momentos por los que atravesaba el país.

En las elecciones resultó vencedora la Unión Democrática Popular (UDP) —constituida por el Partido Comunista Boliviano, el Movimiento de Izquierda revolucionario y el Movimiento Nacionalista Revolucionario de izquierda— encabezada por Hernán Siles Suazo. Sin embargo, la UDP alcanzó los votos suficientes como para que su candidato ocupara el poder.

congreso. Esto pronosticaba nuevas dificultades políticas. De cualquier forma, la realización sin mayores incidentes de las elecciones parecía representar una derrota para los sectores más reaccionarios, encabezados por el ejército y a los cuales el propio imperialismo no apoyaba.

Sin embargo, según han demostrado los acontecimientos, los militares sólo esperaban por condiciones más adecuadas para dar el golpe.

Pero no son los militares quienes tienen la última palabra. De hecho, el principal obstáculo para la estabilización burguesa de Bolivia ha sido el ascenso del movimiento de masas que se viene desarrollando desde 1978.

Ya en noviembre del año pasado el principal factor que provocó el fracaso del golpe de estado del general Natusch fue la extensa resistencia popular que se organizó de manera natural alrededor de la Central Obrera Boliviana. Fue entonces que surgió el Comité Nacional de Defensa de la Democracia. Importantes acciones y movilizaciones se desarrollaron por todo el país. El CONADE se cimentó desde las propias bases de las organizaciones de masas, y a nivel de barrios y centros de trabajo. Ante las amenazas de un nuevo golpe de estado el CONADE, basado principalmente en la COB, mantuvo la organización de la resistencia.

Avanza la campaña económica de solidaridad con El Salvador

Se han ya varios los sindicatos y organizaciones gremiales que han respondido al llamado que ha hecho el Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño para que donen un día de salario, cuota especial o cooperación que serán enviados a las organizaciones revolucionarias salvadoreñas en lucha contra la Junta Cívico Militar, la cual se mantiene gracias a la ayuda económica y militar que le brinda el imperialismo norteamericano.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), por ejemplo, aportó una cuota especial de 60 mil pesos; una cantidad parecida fue entregada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN). Posteriormente, el sindicato del personal académico de la Universidad Autónoma de Chapingo acordó a su vez enviar una cuota especial por parte de cada uno de sus miembros, con la posibilidad de que dicha cuota se haga permanente hasta el triunfo del pueblo salvadoreño sobre la dictadura. Por su parte, la Unión Nacional de Médicos entregó lo recaudado en una primera colecta, con el compromiso de que estas colectas se harán continuamente. Asimismo, el personal del Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha enviado el monto de un día de su salario.

La importancia de esta campaña está a la vista, dada la urgente necesidad que la revolución

Aunque el actual golpe de estado —que aparentemente fue apoyado por los gorilas de Brasil y Argentina— parece mucho más firme que el de Natusch, se ha encontrado inmediatamente con una enorme respuesta popular. La COB llamó casi simultáneamente a la huelga general. Como es tradicional en Bolivia, los mineros se han puesto a la cabeza de la lucha y están preparados para no permitir la entrada del ejército a sus centros de trabajo. En las principales ciudades de Bolivia la población levanta barricadas y se organiza para combatir.

Si los militares cuentan con una larga trayectoria de golpes de estado, la clase obrera boliviana tiene una larga historia de heroicos combates contra estas dictaduras. En varias ocasiones ha sido la vanguardia revolucionaria en América Latina. Desgraciadamente, la dirección de la COB y otras corrientes políticas reformistas en el movimiento obrero la han sacrificado otras tantas veces en el altar del nacionalismo burgués.

A pesar de que, en la práctica, cada vez que la población ha salido a enfrentar a quienes quieren aplastarla la COB se ha puesto indiscutiblemente a la cabeza, su dirección ha impedido que esta organización juegue el rol político que históricamente tiene asignado. Sólo la clase obrera boliviana puede poner fin a la cadena de golpes de estado e intentos frustrados de democracia burguesa. Ahora se trata de detener la mano asesina de los militares, de hacer que se garanticen los mínimos derechos democráticos. Pero esta lucha deberá aprovecharse como un primer paso para acabar de una vez

por todas con las opresivas y miserables condiciones en las que el enfermo capitalismo boliviano mantiene a los trabajadores. Para esto es determinante que en los combates actuales se forje una verdadera dirección obrera revolucionaria.

Para derrotar nuevamente a los gorilas es indispensable el apoyo internacional. El pueblo boliviano, que está batallando heroicamente en las calles, necesita urgentemente de ayuda. El nuevo golpe de estado ha sido repudiado en todas partes del mundo. Corresponde a los trabajadores convertir este repudio en acciones efectivas de solidaridad. Es necesario construir todo un movimiento internacional para exigir que Lechín y todos los dirigentes obreros y políticos detenidos sean liberados, y que se respeten los derechos humanos y las libertades democráticas en Bolivia.

Es necesario alisar a la junta militar boliviana. El gobierno mexicano debe romper inmediatamente relaciones con los nuevos gorilas.

La mejor ayuda que puede recibir en estos momentos el pueblo boliviano sólo puede provenir de los mismos trabajadores. El Congreso del Trabajo y los sindicatos fuera de él deben apoyar directamente a la COB en todo lo que sea posible para derrotar el golpe militar.

La mujer...

(Viene de la página 4)

Otra razón por la cual Carter incluyó a las mujeres en la propuesta sobre la conscripción es para sabotear la lucha por la enmienda constitucional pro igualdad de derechos para la mujer (ERA) al identificarla con la guerra y con la conscripción de mujeres, algo a lo que —como Carter bien sabe— los trabajadores se oponen y temen.

Algunos personajes derechistas como la vocera antifeminista Phyllis Schlafly gustosamente aprovecharon la señal de Carter para culpar a la ERA por la propuesta de inscribir a las mujeres para el servicio militar. Los legisladores en el Estado de Virginia usaron la conscripción como una excusa para no ratificar la ERA. En Misuri, los partidarios de la ERA alegaron que habían perdido apoyo en la legislatura debido a la propuesta de Carter y retiraron la enmienda antes de que se votara.

Pero tanto Schlafly como estos legisladores están perpetuando un fraude. Aparte de que la ratificación de la ERA no llevará a la conscripción de mujeres, su derrota las dejaría sin protección alguna ante la conscripción. Después de todo, la administración Carter propone que las mujeres se inscriban ahora, aunque la ERA todavía no haya sido convertida en ley.

Las mismas fuerzas que se oponen a la ERA son las que respaldan el intento de reinstaurar el servicio militar obligatorio. No es por coincidencia que Carter está tratando de reimponer la conscripción y matar a la ERA al mismo tiempo. Las políticas exterior e interior de Washington son dos caras de la misma moneda: proteger los intereses de las grandes corporaciones, aquí y en el exterior. La patronal se opone a la igualdad de derechos para las mujeres porque obtiene enormes ganancias al pagarles a las mujeres sólo cincuenta y nueve centavos por cada dólar que ganan los hombres, así como de aprovechar los bajos salarios de las mujeres para mantener bajo el nivel de vida de todos los trabajadores.

Es en el interés de todos los trabajadores, hombres y mujeres, luchar por la ratificación de la ERA y por derrotar la conscripción. Cualquier concesión al alegato de Carter de que la igualdad de derechos conlleva la conscripción de las mujeres debilita ambas luchas.

Latinos, negros, mujeres y todo el pueblo trabajador debemos alzar

¡SUSCRIBETE a Bandera Socialista!

trabajadores convertidos en acciones efectivas de solidaridad. Es necesario construir todo un movimiento internacional para exigir que Lechín y todos los dirigentes obreros y políticos detenidos sean liberados, y que se respeten los derechos humanos y las libertades democráticas en Bolivia.

Es necesario aislar a la junta militar boliviana. El gobierno mexicano debe romper inmediatamente relaciones con los nuevos gorilas.

La mejor ayuda que puede recibir en estos momentos el pueblo boliviano sólo puede provenir de los mismos trabajadores. El Congreso del Trabajo y los sindicatos fuera de él deben apoyar directamente a la COB en todo lo que sea posible para derrotar el golpe militar.

La mujer...

(Viene de la página 4)

Otra razón por la cual Carter incluyó a las mujeres en la propuesta sobre la conscripción es para sabotear la lucha por la enmienda constitucional pro igualdad de derechos para la mujer (ERA) al identificarla con la guerra y con la conscripción de mujeres, algo a lo que —como Carter bien sabe— los trabajadores se oponen y temen.

Algunos personajes derechistas como la vocera antifeminista Phyllis Schlafly gustosamente aprovecharon la señal de Carter para culpar a la ERA por la propuesta de inscribir a las mujeres para el servicio militar. Los legisladores en el Estado de Virginia usaron la conscripción como una excusa para no ratificar la ERA. En Misuri, los partidarios de la ERA alegaron que habían perdido apoyo en la legislatura debido a la propuesta de Carter y retiraron la enmienda antes de que se votara.

Pero tanto Schlafly como estos legisladores están perpetuando un fraude. Aparte de que la ratificación de la ERA no llevará a la conscripción de mujeres, su derrota las dejaría sin protección alguna ante la conscripción. Después de todo, la administración Carter propone que las mujeres se inscriban **ahora**, aunque la ERA todavía no haya sido convertida en ley.

Las mismas fuerzas que se oponen a la ERA son las que respaldan el intento de reinstituir el servicio militar obligatorio. No es por coincidencia que Carter está tratando de reimponer la conscripción y matar a la ERA al mismo tiempo. Las políticas exterior e interior de Washington son dos caras de la misma moneda: proteger los intereses de las grandes corporaciones, aquí y en el exterior.

La patronal se opone a la igualdad de derechos para las mujeres porque obtiene enormes ganancias al pagarles a las mujeres sólo cincuenta y nueve centavos por cada dólar que ganan los hombres, así como de aprovechar los bajos salarios de las mujeres para mantener bajo el nivel de vida de todos los trabajadores.

Es en el interés de todos los trabajadores, hombres y mujeres, luchar por la ratificación de la ERA y por derrotar la conscripción. Cualquier concesión al alegato de Carter de que la igualdad de derechos conlleva la conscripción de las mujeres debilita ambas luchas.

Latinos, negros, mujeres y todo el pueblo trabajador debemos alzar juntos la consigna: ERA sí, conscripción no.

Solidaridad con la huelga en El Colegio de México

Las autoridades continúan intransigentes

Por René Arce Islas

Cuarenta años de tranquilidad académica en El Colegio de México han sido interrumpidos. Este semillero de cuadros políticos del régimen por primera vez ve paralizadas sus labores debido a que los trabajadores han decidido hacer uso del arma más efectiva con la que cuentan para defender sus derechos: la huelga.

La historia de este movimiento sindical comenzó hace poco menos de un año, cuando un grupo de trabajadores empezó a difundir la idea de que era necesario agruparse en una organización sindical con el fin de reclamar a las autoridades de El Colegio de México mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales.

Así es como se construyó el SITRACOLMEX (Sindicato Independiente de Trabajadores de El Colegio de México), cuyos dirigentes, en tenaz labor de convencimiento, lograron que la

mayoría de los trabajadores de la institución se afiliara al mismo. Inmediatamente se solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social su registro, el cual le fue negado al declararse la secretaría incompetente para otorgárselo.

Mientras tanto, las autoridades de El Colegio de México, coaligadas con un grupo de trabajadores incondicionales de ellas, se dieron a la tarea de lanzar una campaña de difamación en contra de los dirigentes del recién formado sindicato, acusándolos de estar "controlados" por el Partido Comunista y de querer acabar con una fuente de trabajo. Con amenazas y presiones impulsaron la creación de un "sindicato" incondicional, el SUTCOLMEX (Sindicato Único de Trabajadores de El Colegio de México) encabezado por Teresa Ulloa, el cual buscó inmediatamente la asesoría del traidor Alvaro Lechuga Wences, ampliamente conocido por su nefasta trayectoria de boicot contra el Sindicato de

Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).

El SUTCOLMEX igualmente solicitó el registro sindical en la Secretaría del Trabajo, pero le fue negado con los mismos argumentos que al SITRACOLMEX.

Sin embargo, en los momentos en que el SITRACOLMEX organizaba la respuesta de los trabajadores a la negativa de la patronal a reconocerlo y aceptar su pliego de demandas, el SUTCOLMEX, a espaldas de los trabajadores, firmó el día 30 de junio un convenio laboral con las autoridades y aceptó un aumento salarial del doce por ciento, lo que demostró su carácter entreguista y propatronal.

La mayoría de los trabajadores rechazó esta traición y decidió seguir apoyando al SITRACOLMEX en sus demandas de contratación colectiva y aumento del treinta y cinco por ciento a los salarios.

El día 8 de junio, ante la cerrada actitud de los representantes patronales —Victor I. Urquidí y Carlos Arriola—, a las seis de la mañana se colocaron las banderas

rojinegras. De inmediato la solidaridad se hizo presente: sindicatos, y grupos de estudiantes de artistas y colonos llegaron a mostrar su apoyo de diferentes formas.

No obstante, las amenazas de represión continúan y recae particularmente en los trabajadores de mayor antigüedad, a quienes se les ha dicho que pueden perder el empleo. El SUTCOLMEX por su parte se ha dedicado a afiliar a empleados de confianza y personal recién contratado, para reclamar así la mayoría y justificar así la posible represión a la huelga.

Por todo lo anterior se hace indispensable redoblar la solidaridad con el movimiento. Es particularmente importante que el Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios (SUTUNU) le otorgue una solidaridad real para evitar que se repita lo ya sucedido en Nayarit, Nuevo León, Guanajuato, etc.

Por su parte, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) ofrece al SITRACOLMEX su apoyo incondicional a la huelga que sostiene.

Opresión femenina y control político

Por qué los jóvenes deben organizarse (IV)

Por Tomás Galindo

En la penúltima parte de esta serie queremos abordar, aunque sólo sea someramente, dos problemas claves para la juventud: la opresión de la mujer y la política que está dándose actualmente el gobierno hacia los jóvenes.

Según el último censo, la población femenina en México es mayor que la masculina. Sin embargo, las posibilidades y expectativas intelectuales, políticas y de representación de aquella son absolutamente desproporcionadas con respecto al número de mujeres que hay en nuestro país. Ello es así porque las mujeres sufren una opresión particular que se manifiesta en todos los ámbitos de la actividad social.

De acuerdo con el Noveno Censo General de Población, de la población femenina económicamente activa —en edad de trabajar— sólo el diecinueve por ciento se encontraba ocupada, principalmente en actividades administrativas y de servicios.

En nuestra sociedad las mujeres deben ocuparse de los quehaceres domésticos y el cuidado de los hijos. Es obvio, pues, que muchas veces se ven obligadas a cumplir con una agotadora doble jornada de trabajo: la que realizan en su actividad asalariada y la que desarrollan en su casa.

Con la creciente industrialización del país observamos una aceleración en la integración de la mano de obra femenina al proceso productivo. Sin embargo, este hecho por sí mismo no significa que la mujer se libere de las cadenas de su opresión: en el seno de la fábrica la mujer percibe menos salario que sus compañeros hombres por realizar un trabajo igual. Esto es así porque la discriminación histórica que sufren las mujeres trae consigo que sean utilizadas como mano de obra de reserva.

El otro aspecto que nos interesa subrayar es la situación de la mujer en el ámbito de la educación. Si bien es cierto que la cantidad de mujeres que ingresan a los centros de educación superior ha aumentado, la desigualdad no deja de expresarse en este terreno. A las mujeres se les "convence" para que ingresen a

áreas de la enseñanza que supuestamente tienen relación con su "naturaleza femenina". En las escuelas normales, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes son mujeres; las causas de esto son muy claras: la ideología sexista sostiene que las mujeres tienen cualidades naturales para el cuidado de los niños. Otro ejemplo: la Escuela Nacional de Enfermería cuenta con una población femenina del orden del 89,9 por ciento; ahí se prepara a las mujeres para el cuidado de los enfermos y la ayuda a los médicos, es decir, para desempeñar papeles totalmente subordinados.

Por otro lado, anteriormente ya hemos mencionado cómo la propaganda para incitar al consumismo está orientada en gran medida hacia la juventud. Dentro de esta orientación, son las mujeres jóvenes el blanco preferido de las compañías comerciales de cosméticos, perfumes, ropa moderna, revistas de belleza y moda, etc. Así, a las mujeres jóvenes se les crea la "necesidad" de "lucir" su "belleza" para ser aceptadas por el hombre, en el trabajo, etc. Por otra parte, son los valores estéticos de la cultura imperialista occidental los que determinan el modelo de belleza, hecho sumamente frustrante para la mujer mexicana, cuyas características físicas no corresponden a dicho modelo. Lo anterior se explica porque la mujer es considerada como objeto sexual.

La política del gobierno hacia la juventud

Las políticas que los distintos regímenes se han dado hacia la juventud han cambiado en la medida en que ha aumentado la oposición juvenil a las políticas estatales.

1968 marca precisamente la ruptura en la continuidad del control estatal sobre la juventud. En efecto, el '68 afectó a la sociedad en su conjunto. Si la izquierda tuvo que replantearse la formación de una alternativa auténticamente revolucionaria, el campo burgués tuvo que replantearse sus políticas de dominación sobre la juventud. ¿Qué hace ante el fracaso —a largo plazo— de la alternativa represiva que el estado implementa? Se preguntaban los ideólogos más lúcidos del capitalismo. Los sectores modernizantes de la época de Echeverría pretendieron resolver el dilema —entre otras cosas— a través del llamado "diálogo con la juventud". En el sexenio pasado asistimos a la más audaz campaña

para la intoxicación ideológica de la juventud.

Plantéabamos que el '68 obligó al estado a redefinir sus políticas hacia la juventud. Esto incluyó el remozamiento de sus organismos de control, a los que dotó de una imagen distinta y "democrática". Al burocrático INJUVE le sucedió una moderna y "dialogante" institución: el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA).

El CREA se encuadra perfectamente dentro de las tendencias que propugnan hacer del y de la joven entes "responsables", es decir, convertir a la juventud en puntal de la sociedad dividida en clases. Para tener alguna credibilidad es necesario que el CREA toque —al menos superficialmente— algunos de los problemas que más afectan a la juventud. Así, por ejemplo, el poseedor de una tarjeta del CREA logra algunos descuentos en ciertas tiendas y servicios.

Pero el CREA tiene que apuntar más allá. Por eso ha creado una bolsa de trabajo para jóvenes desempleados y la Procuraduría de la Juventud, que tiene el objeto de proporcionar "protección" a los jóvenes.

La política del gobierno hacia los jóvenes tiene, desde luego, su trasfondo económico: los problemas del desempleo y en general de la depresión del nivel de vida repercuten entre la juventud.

La política de austeridad del gobierno se complementa con una permanente ofensiva contra las libertades democráticas. Para apuntalar la política de austeridad se recurre a la restricción de las libertades democráticas de organización, reunión y manifestación, lo que —dada su radicalización— afecta de manera importante a la juventud. Para que sea efectiva, la política estatal debe complementarse asimismo con la sujeción ideológica de la juventud, para evitar que cuestione el sistema de la clase dominante. Así, se trata de reforzar los valores autoritarios y jerárquicos.

A pesar de todo, es innegable que los valores capitalistas están en crisis, lo que inevitablemente trae consigo una apertura ideológica y cultural; esto, a su vez, abre la posibilidad de que la juventud tome conciencia sobre la dimensión social y colectiva de los problemas que se viven como "individuales": la familia, el autoritarismo, la represión sexual, etc.

Miembro de la UNM y el PRT amenazado

El Dr. José Martínez Ramírez, miembro activo de la Unión Nacional de Médicos (UNM), fue amenazado de ser baleado por un reconocido "halcón" al servicio de las autoridades sanitarias locales de Tijuana, Baja California Norte. Tal amago surgió como resultado directo de su militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su participación activa en la UNM, de la que fue Secretario de Prensa y Propaganda durante 1979.

Este hecho fue denunciado inmediatamente ante las autoridades de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) en el Distrito Federal, al mismo tiempo que se responsabilizó a las autoridades estatales y sanitarias de cualquier agresión física o moral que puedan sufrir tanto el Dr. Martínez Ramírez como los compañeros Flor de Guadalupe Castellanos, Nelly Ley Lio, Román Pérez Sarmiento, Ramón García Benjamín, Víctor Hugo Serrano y Francisco Ley Hernández, miembros también de la UNM.

Por otro lado, es necesario destacar que se ha venido instrumentando toda una campaña de hostigamiento e intimidación en contra de los miembros de la UNM. Así, se ha tratado de imponerles horarios discontinuos de trabajo con el fin de neutralizar su actividad política en las comunidades, se vigilan en forma policiaca sus actividades cotidianas, etc.

La UNM está consciente de que tales agresiones surgen por la postura democrática e independiente que mantiene en el sector de los trabajadores de la salud, así como por el hecho de que las burocracias estatales del área de la salud quieren arrebatarse a la UNM las plazas que ha conquistado, para otorgarlas a sus recomendados incondicionales.

Opresión femenina y control político

Por qué los jóvenes deben organizarse (IV)

Por Tomás Galindo

En la penúltima parte de esta serie queremos abordar, aunque sólo sea someramente, dos problemas claves para la juventud: la opresión de la mujer y la política que está dándose actualmente el gobierno hacia los jóvenes.

Según el último censo, la población femenina en México es mayor que la masculina. Sin embargo, las posibilidades y expectativas intelectuales, políticas y de representación de aquélla son absolutamente desproporcionadas con respecto al número de mujeres que hay en nuestro país. Ello es así porque las mujeres sufren una opresión particular que se manifiesta en todos los ámbitos de la actividad social.

De acuerdo con el Noveno Censo General de Población, de la población femenina económicamente activa —en edad de trabajar— sólo el diecinueve por ciento se encontraba ocupada, principalmente en actividades administrativas y de servicios.

En nuestra sociedad las mujeres deben ocuparse de los quehaceres domésticos y el cuidado de los hijos. Es obvio, pues, que muchas veces se ven obligadas a cumplir con una agotadora doble jornada de trabajo: la que realizan en su actividad asalariada y la que desarrollan en su casa.

Con la creciente industrialización del país observamos una aceleración en la integración de la mano de obra femenina al proceso productivo. Sin embargo, este hecho por sí mismo no significa que la mujer se libere de las cadenas de su opresión: en el seno de la fábrica la mujer percibe menos salario que sus compañeros hombres por realizar un trabajo igual. Esto es así porque la discriminación histórica que sufren las mujeres trae consigo que sean utilizadas como mano de obra de reserva.

El otro aspecto que nos interesa subrayar es la situación de la mujer en el ámbito de la educación. Si bien es cierto que la cantidad de mujeres que ingresan a los centros de educación superior ha aumentado, la desigualdad no deja de expresarse en este terreno. A las mujeres se les "convence" para que ingresen a

áreas de la enseñanza que supuestamente tienen relación con su "naturaleza femenina". En las escuelas normales, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes son mujeres; las causas de esto son muy claras: la ideología sexista sostiene que las mujeres tienen cualidades naturales para el cuidado de los niños. Otro ejemplo: la Escuela Nacional de Enfermería cuenta con una población femenina del orden del 89.9 por ciento; ahí se prepara a las mujeres para el cuidado de los enfermos y la ayuda a los médicos, es decir, para desempeñar papeles totalmente subordinados.

Por otro lado, anteriormente ya hemos mencionado cómo la propaganda para incitar al consumismo está orientada en gran medida hacia la juventud. Dentro de esta orientación, son las mujeres jóvenes el blanco preferido de las compañías comerciales de cosméticos, perfumes, ropa moderna, revistas de belleza y moda, etc. Así, a las mujeres jóvenes se les crea la "necesidad" de "lucir" su "belleza" para ser aceptadas por el hombre, en el trabajo, etc. Por otra parte, son los valores estéticos de la cultura imperialista occidental los que determinan el modelo de belleza, hecho sumamente frustrante para la mujer mexicana, cuyas características físicas no corresponden a dicho modelo. Lo anterior se explica porque la mujer es considerada como objeto sexual.

La política del gobierno hacia la juventud

Las políticas que los distintos regímenes se han dado hacia la juventud han cambiado en la medida en que ha aumentado la oposición juvenil a las políticas estatales.

1968 marca precisamente la ruptura en la continuidad del control estatal sobre la juventud. En efecto, el '68 afectó a la sociedad en su conjunto. Si la izquierda tuvo que replantearse la formación de una alternativa auténticamente revolucionaria, el campo burgués tuvo que replantearse sus políticas de dominación sobre la juventud. "¿Qué hacer ante el fracaso —a largo plazo— de la alternativa represiva que el estado implementa?", se preguntaban los ideólogos más lúcidos del capitalismo. Los sectores modernizantes de la época de Echeverría pretendieron resolver el dilema —entre otras cosas— a través del llamado "diálogo con la juventud". En el sexenio pasado asistimos a la más audaz campaña

para la intoxicación ideológica de la juventud.

Planteábamos que el '68 obligó al estado a redefinir sus políticas hacia la juventud. Esto incluyó el remozamiento de sus organismos de control, a los que dotó de una imagen distinta y "democrática". Al burocrático INJUVE le sucedió una moderna y "dialogante" institución: el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA).

El CREA se encuadra perfectamente dentro de las tendencias que propugnan hacer del y de la jóvenes "responsables", es decir, convertir a la juventud en puntal de la sociedad dividida en clases. Para tener alguna credibilidad es necesario que el CREA toque —al menos superficialmente— algunos de los problemas que más afectan a la juventud. Así, por ejemplo, el poseedor de una tarjeta del CREA logra algunos descuentos en ciertas tiendas y servicios.

Pero el CREA tiene que apuntar más allá. Por eso ha creado una bolsa de trabajo para jóvenes desempleados y la Procuraduría de la Juventud, que tiene el objeto de proporcionar "protección" a los jóvenes.

La política del gobierno hacia los jóvenes tiene, desde luego, su trasfondo económico: los problemas del desempleo y en general de la depresión del nivel de vida repercuten entre la juventud.

La política de austeridad del gobierno se complementa con una permanente ofensiva contra las libertades democráticas. Para apuntalar la política de austeridad se recurre a la restricción de las libertades democráticas de organización, reunión y manifestación, lo que —dada su radicalización— afecta de manera importante a la juventud.

Para que sea efectiva, la política estatal debe complementarse asimismo con la sujeción ideológica de la juventud, para evitar que cuestione el sistema de la clase dominante. Así, se trata de reforzar los valores autoritarios y jerárquicos.

A pesar de todo, es innegable que los valores capitalistas están en crisis, lo que inevitablemente trae consigo una apertura ideológica y cultural; esto, a su vez, abre la posibilidad de que la juventud tome conciencia sobre la **dimensión social y colectiva** de los problemas que se viven como "individuales": la familia, el autoritarismo, la represión sexual, etc.

Miembro de la UNM y el PRT amenazado

El Dr. José Martínez Ramírez, miembro activo de la Unión Nacional de Médicos (UNM), fue amenazado de ser baleado por un reconocido "halcón" al servicio de las autoridades sanitarias locales en Tijuana, Baja California Norte. Tal amago surgió como resultado directo de su militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su participación activa en la UNM de la que fue Secretario de Prensa y Propaganda durante 1979.

Este hecho fue denunciado inmediatamente ante las autoridades de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) del Distrito Federal, al mismo tiempo que se responsabilizó a las autoridades estatales y sanitarias de cualquier agresión física o moral que puedan sufrir tanto el Dr. Martínez Ramírez como los compañeros Flor Guadalupe Castellanos, Nellio, Román Pérez Sarmiento, Ramón García Benjamín, y Hugo Serrano y Francisco Hernández, miembros tanto de la UNM.

Por otro lado, es necesario destacar que se ha venido instrumentando toda una campaña de hostigamiento e intimidación en contra de los miembros de la UNM. Así, se ha tratado de imponerles horarios de trabajo con el fin de neutralizar su actividad en las comunidades, así como en forma policiaca sus actividades cotidianas, etc.

La UNM está consciente de tales agresiones y la postura democrática independiente que mantiene en el sector de los trabajadores de la salud, así como por que las burocracias de la salud quieren arrebatar a la UNM que ha conquistado otorgarlas a sus incondicionales.

Nuevas amenazas de la "LC 23" contra militantes de izquierda blanco: el Frente Nacional contra la Represión

cientemente ha comenzado a circular un periódico que aparece en el número 50 de Madera, en el mes de agosto. Desde hace tiempo, la organización ha sido declarada ilegal por parte de sus propios fundadores. En todo caso, lo que hoy pudiera quedar de la organización serían los últimos restos de su naufragio. Quienes se han reclamando de la liga, al no haber ninguna autocritica de la política pasada de la organización, se hacen responsables de los errores y los crímenes políticos cometidos por ella. La práctica política de la liga en el pasado está signada por los asesinatos que ha cometido contra militantes revolucionarios como Alfonso Peralta Reyes, quien fuera dirigente destacado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Para nuestro partido, las organizaciones que realizan actos de esta naturaleza sólo benefician al gobierno y a la burguesía; atentan contra el desarrollo del movimiento de masas y el fortalecimiento de sus organizaciones al convertirse en una fácil de la infiltración policiaca en instrumentos para la provocación. La policía aprovecha la evasión militarista y la falta de perspectivas políticas de núcleos como la Liga Comunista 23 de Septiembre para fomentar el uso de la violencia en el seno del movimiento de masas con el fin de confundirlo, paralizarlo, sembrar la desconfianza entre sus componentes y, en última instancia, desmembrarlo. Finalmente, el uso de este tipo de métodos facilita al gobierno la realización de una represión efectiva.

Asesinar a militantes de izquierda como lo hizo la liga en Sinaloa con Severa Niebla, en la Ciudad de México con Alfonso Peralta Reyes y en Oaxaca con Chavarría— es hacerle gran favor al gobierno capitalista. Por eso, porque sus acciones se prestan para ser utilizadas por la policía, es que sostenemos que la Liga Comunista 23 de Septiembre es un peligro latente contra el movimiento obrero. Aún más, dada la degeneración que ha marcado cada una de sus acciones y las afirmaciones de sus fundadores en el sentido de que ha desaparecido, encuentran más fundamento las sospechas de que es la policía precisamente la que ha hecho uso del nombre de la liga para atacar a los movimientos democráticos y de izquierda.

Es por esto peligroso que en el número 50 del periódico Madera se sigan una vez más los epítetos contra el PRT y otras organizaciones como el Partido Comunista Mexicano, Corriente Socialista y Punto Crítico, calificándolas de "oportunistas" y "fieles servidores al capital". Con este tipo de argumentos han tratado de justificar en el pasado los asesinatos políticos cometidos. Madera hace especial énfasis en sus calumnias a tres compañeros: a Sánchez Hiraes, "jefe de la Corriente Socialista"; a "El Coronel"—posiblemente se refiere a "El General", dirigente de la Organización Nacional de Estudiantes—; y a Pedro Peñaloza, dirigente del PRT.

Peñaloza es el representante del PRT en el Frente Nacional contra la Represión, por las Libertades Democráticas y la Solidaridad. En los últimos meses el frente le ha asignado diferentes responsabilidades de organización y representación. Conocemos los métodos de la liga. Por eso pensamos que la vida de Pedro Peñaloza y de los otros dos compañeros contra la

Es claro que cualquier atentado contra nuestro camarada sólo beneficiaría al gobierno mexicano, que se niega a liberar a los presos políticos que aún subsisten en las cárceles y a aclarar la situación de los secuestrados. El gobierno está buscando la forma de frenar la campaña constante de denuncia que incluso a nivel internacional desarrolla el Frente Nacional contra la Represión. Podemos recordar que en la reciente detención del militante del PRT José Ramírez V. la policía lo interrogó especialmente sobre diferentes miembros del Frente

Nacional contra la Represión, a quienes quería que reconociera como impulsores de grupos armados. Por eso es claro que el gobierno está tratando de asestar un golpe al frente. Por eso, compañeros como Peñaloza están en la mira de la represión. Pero al gobierno no le conviene efectuar un crimen contra nuestro partido y contra el frente de manera directa, por lo que podría aprovechar la careta de izquierda de la liga para realizarlo o provocar que, de existir, ésta lo haga.

Es urgente levantar una campaña política en contra del uso de la



Sánchez Hiraes y Pedro Peñaloza —segundo y tercero de izquierda a derecha, respectivamente. Ambos han sido amenazados por la liga.

¿hasta cuándo— IV Pleno del Frente contra la Represión

Por Pedro Peñaloza

Los días 12 y 13 de julio se realizó en la ciudad de Monterrey el Cuarto Pleno Nacional del Frente Nacional contra la Represión, por las Libertades Democráticas y la Solidaridad. A dicha reunión asistieron representaciones de aproximadamente veinticinco organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y populares, entre ellas de los sindicatos de General Motors y Acemex, el Comité Central de Lucha de los Trabajadores de la Educación de Morelos y comités de diversos estados del país que luchan contra la represión.

El primer punto del orden del día fue la discusión del plan de acción que presentó la Coordinadora Nacional del frente en relación a la lucha por una ley de amnistía irrestricta e incondicional, cuya importancia adquiere relevancia hoy en la medida en que dicha ley será discutida en el próximo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados. Se acordó por lo tanto intensificar la campaña de propagandización y agitación en torno a la necesidad imperiosa de dicha ley; la campaña incluye conferencias, mítines, volantes, carteles, etc., y culminará con una movilización frente a la Cámara de Diputados el día en que ésta inicie sus sesiones, alrededor del próximo primero de septiembre.

Otro acuerdo que se tomó fue iniciar una campaña para demandar legalmente la disolución de los cuerpos represivos anticonstitucionales y para exigir el castigo de los responsables de los secuestros, asesinatos y torturas cometidos en contra de los

ciudadanos que se han atrevido a luchar por hacer valer sus derechos.

Por otro lado, también se acordó iniciar una campaña por la amnistía de algunos presos políticos cuyas condiciones carcelarias exigen la más enérgica y amplia protesta; es decir —sin que esto implique hacer a un lado la lucha por la amnistía de todos los presos políticos—, se consideró necesario pasar de la demanda general a la lucha por casos concretos, entre los que destacan —por la situación carcelaria de los compañeros— los de Juan Islas, Arturo Gallegos —presos en Santa Martha Acatitla— y Aquilino Lorenzo Avila —preso en Acapulco.

Como segundo punto del orden del día se abordó la discusión sobre los violentos sucesos provocados por algunos grupos "izquierdistas" durante la marcha efectuada el 10 de junio en la Ciudad de México. Dado que uno de los grupos estudiantiles involucrados en el sabotaje, el Comité Estudiantil de Solidaridad Obrero Campesina (CESOC) ligado a Punto Crítico, es integrante del frente, era necesario ventilar dicho asunto en el seno de éste con el fin de resolver qué medidas tomar contra quienes usan la violencia física para tratar de imponer posiciones. Desde un principio hubo dos posturas en el debate; la primera, sostenida por la Corriente Socialista y la Liga Obrera Marxista, proponía que Punto Crítico saliera de la Coordinadora Nacional

violencia para dirimir las diferencias políticas en el seno del movimiento obrero y de sus aliados; contra los métodos de la liga, que deben ser repudiados por todas las organizaciones democráticas y en general por todo el movimiento obrero y de masas.

En el citado número de Madera, se hace un análisis de la manifestación del 10 de junio, en el cual se afirma que el Frente Nacional contra la Represión cambió el recorrido de la manifestación por "disposiciones del estado burgués". Este juicio —absurdo y calumniador, y que coincide perfectamente con las provocaciones que pretende montar el gobierno— también fue hecho por grupos estudiantiles como el Comité Estudiantil de Solidaridad Obrero Campesina (CESOC), la Corriente Estudiantil Democrática (CED) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Buró de Información Política (BIP) y el grupo denominado "los jarochos" de la Preparatoria Popular de Tacuba. Se impone, entonces, un deslinde público de estas organizaciones con respecto a la liga. No les pedimos que renuncien a sus posiciones políticas; les pedimos que se deslinden de los métodos de la liga y que repudien las amenazas contra los tres compañeros que ésta menciona en Madera.

Hacemos pues un llamado a todas las organizaciones y corrientes políticas a que denuncien los métodos que la aparentemente reconstituida Liga Comunista 23 de Septiembre pretende reintroducir en el movimiento de masas. La clara definición política de todas las corrientes es una necesidad que se impone. Esta definición es una base para poder combatir las causas que permiten la degeneración política de algunos sectores, en especial estudiantiles, cuyos falso radicalismo y métodos ajenos al movimiento obrero los convierten en caldo de cultivo de agrupamientos como la Liga Comunista 23 de Septiembre.

De cualquier forma, estamos seguros, y en lo que nos corresponde lo afirmamos, de que ninguna clase de amenazas o amedrantamientos podrá surtir los efectos deseados: frenar la lucha contra la represión gubernamental. Por el contrario, cualquier agresión encontrará una firme respuesta.

por haber dado cobertura e incluso participado junto con los "ultrarevolucionarios" en el sabotaje. La segunda —sostenida por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Partido Comunista Mexicano y la Unión por la Organización del Movimiento Estudiantil— se oponía a que Punto Crítico fuera sancionado de esa manera, sin antes agotar las posibilidades del convencimiento político por medio de la discusión amplia y democrática. Por diecisiete votos contra siete, Punto Crítico no fue excluido de la Coordinadora Nacional.

Otro acuerdo importante que se tomó fue el de realizar una movilización en todos los estados del país en solidaridad con la lucha del pueblo salvadoreño el próximo 26 de julio, de ser posible simultáneamente con el Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño.

Se acordó hacer la próxima reunión plenaria del frente contra la represión el 2 de septiembre en la Ciudad de México, para evaluar la realización de los trabajos que ahora se votó efectuar; el eje central de éstos es la recolección del millón de pesos y el millón de firmas por la amnistía cuya primera etapa de recuento será el 26 de julio.

Como último acuerdo se ratificó a la Coordinadora Nacional, de cuyo esfuerzo dependerán la centralización y la organización de la lucha del frente.

BCN: se inició campaña electoral

socialista

En un mitin de colonos, duelo político con De La Madrid

La participación electoral del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en Baja California Norte se ha iniciado con grandes perspectivas de resultar exitosa. Tal y como informamos en el número 153 de **Bandera Socialista**, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) aceptó abrir sus listas para las elecciones municipales y de diputados locales en Tijuana a candidatos ligados al movimiento de masas. De esta manera, siete miembros del PRT que son conocidos dirigentes y activistas fueron registrados por el PST. Aunque la campaña electoral no es resultado de una alianza PST-PRT, la militancia de estos compañeros en el PRT es conocida públicamente.

El pasado 5 de julio el PRT celebró su mitin de inicio de campaña en el salón de los telefonistas. Ahí fueron presentados los candidatos registrados por el PST que son miembros del PRT. Ellos son los siguientes camaradas: Manuel Acuña Dorbolla, dirigente sindical universitario, candidato a presidente municipal de Tijuana; Luz María Uribe, Catalino Zavala y Juan Castro —dirigentes del Comité Unión de Colonos Urbanos de Tijuana AC (CUCUTAC)—, y Zelina Espinoza y Fernando Güereña —dirigente feminista y líder estudiantil, respectivamente—, candidatos todos a diputados propietarios y suplentes; además, Jorge Luis Ontiveros, obrero, candidato a regidor.

Al mitin de inicio de campaña fueron invitados el PST y el Partido Comunista Mexicano (PCM), los que dirigieron saludos al mismo. El PCM lo hizo para supuestamente lamentarse de la imposibilidad de haber concretado la unidad en estas elecciones, pero que, eso sí, nos debe unir el objetivo final: el

socialismo. Estas importantes declaraciones reflejan muy bien lo que ha sido la política del PCM hacia las demás organizaciones de izquierda, particularmente al PRT, en las coyunturas electorales: una política sectorial apoyada en los privilegios legales que antidemocráticamente tiene por encima de aquellas, encubierta con llamados a la unidad en abstracto. Lo que ocurriría una semana después en La Paz, Baja California Sur, donde el PCM rompió la coalición PRT-PCM-POS, muestra hasta dónde llega la impregnación que previamente había hecho en Tijuana de los candidatos del PRT registrados por el PST.

El hecho de que los candidatos del PRT registrados por el PST representen a los principales sectores en lucha de Tijuana le da a la campaña electoral una especial

importancia. Los trabajadores, colonos, mujeres y jóvenes en lucha de Tijuana pueden identificarse en estas candidaturas que son presentadas por el PRT, no como la solución electoral a los problemas, sino como medios para continuar las movilizaciones y la lucha misma.

Lo anterior se comprobó una semana después. El jueves 10 de julio, en el fraccionamiento llamado "Siachez Taboada", se produjo una confrontación política entre el gobernador Roberto De La Madrid y el camarada Catalino Zavala, uno de los candidatos a diputado y dirigente del CUCUTAC. Aunque la prensa local quiso presentarlo como casi un choque violento entre militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del PRT, apenas evitado por el gobernador, el asunto tuvo en realidad mayor importancia política. En efecto, mostró el fracaso político del candidato a presidente municipal por

parte del PRI, Roberto Andrade Salazar, para ser escuchado entre los habitantes de las colonias, uno de los sectores más golpeados por el gobierno. El PRI tenía ya bien preparado el mitin donde hablaría el candidato a presidente municipal y el gobernador cuando se presentara Catalino Zavala, que representa precisamente las luchas más combativas que han dado los colonos de la ciudad, y llamó a un mitin paralelo al que se trasladaron todos los colonos. El gobernador del estado tuvo que presentarse en el mitin organizado por el PRT, Andrade se desató un debate político público con Catalino Zavala y los colonos en lucha.

El acto tenía especial relevancia frente al hecho de que dos días después el presidente de la república tenía que visitar la ciudad.

De esta manera, la campaña electoral del PRT se convierte en el polo político de la lucha de los trabajadores de Tijuana.



Los candidatos del PRT iniciaron su campaña política con severas críticas al gobierno de Roberto De La Madrid, al que acusaron de proteger a los grandes capitalistas como los Fimbres y Limón —periódico ZETA de Tijuana.

Recta final electoral en el STRM

Entre las maniobras de la dirección y la ofensiva de la empresa

Por Rosalba Arismendi

El proceso electoral que actualmente vive el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) ha hecho más evidente la real situación interna del sindicato, al mismo tiempo que se ha intensificado la ofensiva de Teléfonos de México (Tel-Mex) contra el STRM.

A raíz de la huelga realizada por los trabajadores telefonistas en abril de este año —en la que, a pesar del esquirolaje y la requisa, no se rompió la unidad de la base—, se han incrementado tanto la intromisión de la empresa en la vida sindical como la represión patronal en contra de los trabajadores. Esto se ha concretado en amenazas de investigar a algunas compañeras —lo que de hecho representa el paso previo a rescindirles el contrato—, de frenar cualquier negociación laboral y no reconocer a los delegados sindicales electos en asamblea; en Monterrey, la empresa trata de golpear a los compañeros del departamento de tráfico, pues junto con la dirección

sindical de la sección han hecho importantes avances en el sentido de mejorar sus condiciones laborales; Tel-Mex también ha reinstalado a los miembros de la camarilla "charra" de Salustio Salgado a los que se les aplicó la cláusula de exclusión después del movimiento de 1976.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) encabezado por Hernández Juárez se ha visto en una posición cada vez más débil y desventajosa para enfrentar la ofensiva de la empresa, lo cual es producto de su política desmovilizadora.

Igualmente, la reticencia de Hernández Juárez a enfrentarse a la patronal y al gobierno se manifiesta en la resistencia que ha venido mostrando para aplicar la cláusula de exclusión a las operadoras que esquirolearon durante la pasada huelga, tal y como fue decidido por la base sindicalista en su conjunto. Por este motivo, existe el peligro de que las asambleas de delegados —como las de la Sección Matriz— que han sido llamadas para volver a ratificar los acuerdos en este sentido

se utilicen realmente para revocarlos.

En cuanto al proceso electoral mismo, la política del CEN se ha basado en la violación sistemática de los estatutos. En efecto, se han sacado las urnas del local del sindicato y llevado a los centros de trabajo; la Comisión Electoral, que debe ser imparcial, se ha abocado a hacer propaganda a favor de la Planilla Verde encabezada por Hernández Juárez y a presionar a los trabajadores en el momento en que acuden a votar; en algunas secciones foráneas, miembros de la comisión han llegado a amenazar hasta con el despido a los trabajadores que votan por la Planilla Naranja que impulsa la oposición democrática.

Por otro lado, la falta de información sobre el desarrollo del proceso electoral es total; inclusive, hay secciones foráneas que están al margen del proceso. En este contexto, los trabajadores han optado por mantenerse a la expectativa, como lo muestra el hecho de que hasta el 14 de julio —diez días después de haberse iniciado las elecciones— solamente habían votado 2 mil trabajadores en la Sección Matriz. Es significativo, sin embargo, que a pesar de las maniobras de la dirección las votaciones vayan más o menos cerradas entre la Naranja y la Verde.

La Planilla Violeta, impulsada por los seguidores del derrocado "charro" Salustio, ha mostrado su escaso apoyo.

Por su parte, la oposición democrática ha venido impulsando su campaña con el apoyo económico de sus integrantes, y de telefonistas que simpatizan con los planteamientos políticos y las demandas presentadas en su programa electoral. La Planilla Naranja ha hecho una denuncia sistemática de las violaciones realizadas por la Comisión Electoral; exige el cese de la intromisión de la empresa y el gobierno en la vida interna del sindicato, y que sean los propios trabajadores telefonistas quienes libremente elijan a su dirección sindical, sin presiones ni amenazas. La Planilla Naranja de los Trabajadores representa la lucha por la democracia y la independencia sindicales, y por las demandas más sentidas por los telefonistas: el respeto al derecho de huelga, la derogación de la ley de requisa, la reducción de años para la jubilación, la reducción de la jornada de trabajo de las operadoras, una mejor vivienda para los telefonistas, la reinstalación de los despedidos políticos, el manejo honesto de las cuotas sindicales, tiendas de consumo para los telefonistas, la lucha constante en defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. Es por esto que la Planilla Naranja representa la alternativa que requiere el sindicato para fortalecerse.